

**SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
BIENES ESTATALES**



RESOLUCIÓN N° 0132-2022/SBN-GG

San Isidro, 28 de noviembre de 2022

VISTOS:

La Carta S/N (S.I N° 30748-2022) de fecha 14 de noviembre de 2022 y la Carta N° 02-2023-CRRM (S.I. N° 31713-2022) de fecha 23 de noviembre de 2022 de la ex servidora Cyntia Raquel Rudas Murga; el Informe N° 01051-2022/SBN-OAF-SAPE de fecha 15 de noviembre de 2022 de la Unidad de Recursos Humanos; el Informe N° 00548-2022/SBN-OAJ de fecha 28 de noviembre de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través del literal l) del artículo 35 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en concordancia con el artículo 154 de su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se reconoce el derecho individual del servidor civil de contar con defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aún cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad, y si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados;

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se dispone que las entidades públicas deben otorgar la defensa y asesorías, a que se refiere el literal l) del artículo 35 de la indicada Ley, a los servidores civiles que ejerzan o hayan ejercido funciones y resuelto actos administrativos o actos de administración interna bajo criterios de gestión en su oportunidad;

Que, con la versión actualizada de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC denominada "Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles", aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 185-2016-

SERVIR-PE y modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE, se dispone que para efectos de la mencionada Directiva, se entiende que el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública, además en dicha directiva se regula la procedencia para el ejercicio del derecho a la defensa y asesoría, los requisitos para la admisibilidad de la solicitud de defensa; asimismo, se precisa que, de considerar procedente la solicitud, se formaliza mediante resolución del titular de la entidad indicando expresamente la procedencia o no de la autorización del otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría y disponiendo que los órganos competentes adopten las acciones para la ejecución de los gastos respectivos;

Que, en el numeral 6.1 del artículo 6 de la precitada Directiva se señala que para la procedencia del ejercicio del derecho a la defensa y asesoría se requiere de una solicitud expresa conteniendo los requisitos establecidos en la misma y que el servidor o ex servidor civil haya sido citado o emplazado formalmente en calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable o para la actuación de alguna prueba, dentro de algún proceso, investigación o procedimiento judicial, administrativo, constitucional, arbitral, investigación congresal y policial, en los que resulten comprendidos, sea por omisiones, actos administrativos o de administración interna o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones o actividades o bajo criterios de gestión en su oportunidad;

Que, a través del numeral 7.1 de la Directiva N° 005-2017/SBN-SG “Procedimientos para acceder a la defensa y asesoría a los servidores y ex servidores de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN”, aprobada por la Resolución N° 112-2017/SBN-SG, modificada con la Resolución N° 075-2018/SBN-GG, se establece que para acceder al derecho de defensa y asesoría, el solicitante debe presentar ante la Oficina de Trámite Documentario o la que haga sus veces de la entidad respectiva, los siguientes documentos: i) Solicitud dirigida al titular de la entidad, ii) Compromiso de reembolso por medio del cual el solicitante se compromete a devolver el costo de asesoramiento y de la defensa, iii) Propuesta de servicio de defensa legal, y iv) Compromiso de devolver a la entidad los costos y las costas determinados a su favor, en caso no resulte responsable en el procedimiento, proceso o investigación; siendo que los documentos presentados tienen la calidad de declaración jurada para todos los efectos legales que correspondan;

Que, a través de la Carta S/N (S.I N° 30748-2022) de fecha 14 de noviembre de 2022 y la Carta N° 02-2023-CRRM (S.I. N° 31713-2022) de fecha 23 de noviembre de 2022, la ex servidora Cyntia Raquel Rudas Murga solicita a la Gerencia General que se le otorgue el beneficio de defensa legal a fin de contar con una asesoría externa en la apertura de Investigación Preliminar de la denuncia seguida ante el 4to. Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por supuesto delito contra la Administración Pública – Delitos cometidos por funcionarios públicos – Tráfico de Influencias, conforme a la Disposición N° 1 de fecha 25 de octubre de 2022 (Carpeta Fiscal N° 368-2022); para lo cual, adjunta la copia de la Notificación N° 00004-2022 de fecha 27 de octubre de 2022 dirigida a dicha ex servidora, el compromiso de reembolso, la propuesta de defensa y el compromiso de devolución;

Que, con el Informe N° 01051-2022/SBN-OAF-SAPE de fecha 15 de noviembre de 2022, la Unidad de Recursos Humanos remite el Informe Escalafonario N° 069-2022/SBN-OAF-SAPE de fecha 15 de noviembre de 2022, en el cual se brinda información laboral de la ex servidora Cyntia Raquel Rudas Murga;

Que, mediante el Informe N° 00548-2022/SBN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable respecto de la solicitud de defensa legal de la ex servidora Cyntia Raquel Rudas Murga, al cumplir con los requisitos de admisibilidad y procedencia exigidos por la versión actualizada de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, cuya formalización fue aprobada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 185-2016-SERVIR-PE, modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE, y la Directiva N° 005-2017/SBN-SG aprobada por la Resolución N° 112-2017/SBN-SG y modificada por la Resolución N° 075-2018/SBN-GG, por lo que resulta procedente autorizar el otorgamiento del beneficio de defensa legal solicitado;

Que, asimismo, en el Informe citado en el considerando precedente, se recomienda que la Oficina de Administración y Finanzas tenga en cuenta la opinión de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, la cual a través del numeral 2.11 del Informe Técnico N° 197-2017-SERVIR/GPGSC, manifiesta que *“(...) la solicitud para que un abogado o asesor específico sea contratado para la defensa del servidor o ex servidor a que se refiere el inciso b) del numeral 6.3 tiene la condición de propuesta y no es una condición de obligatorio cumplimiento por parte de la entidad, máxime si dicho beneficio se financia con cargo al presupuesto de la entidad sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público (...)”*; y, que la contratación del servicio de defensa y asesoría legal estará condicionada a que la entidad cuente con el presupuesto necesario, ya que no debe demandar recursos adicionales al Tesoro Público;

Que, atendiendo al marco legal citado y a lo informado por la Unidad de Recursos Humanos y la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica, resulta procedente otorgar el beneficio de defensa legal solicitado por la ex servidora Cyntia Raquel Rudas Murga, para la contratación del servicio especializado de asesoría legal;

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la versión actualizada de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, cuya formalización fue aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 185-2016-2017-SERVIR-PE, y modificatoria; la Directiva N° 005-2017/SBN-SG, aprobada por la Resolución N° 112-2017/SBN-SG y modificatoria; y, de acuerdo a la facultad prevista en el literal I) del artículo 11 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Resolución N° 0066-2022/SBN en concordancia con el Decreto Supremo N° 011-2022-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar procedente el otorgamiento del beneficio de defensa legal, solicitado por la ex servidora Cyntia Raquel Rudas Murga en la investigación iniciada por el 4to. Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Carpeta Fiscal N° 368-2022), por el presunto delito contra la Administración Pública – Delitos cometidos por funcionarios públicos – Tráfico de Influencias en el ejercicio de sus funciones como Superintendente Nacional de Bienes Estatales, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conforme al ámbito de sus competencias, adopten acciones pertinentes para la ejecución de los gastos respectivos en virtud de la defensa legal concedida en el artículo 1 de la presente Resolución, de conformidad a las disposiciones establecidas en la versión actualizada de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC y modificatoria.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la ex servidora Cyntia Raquel Rudas Murga, para los fines pertinentes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la Sede Digital de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (www.gob.pe/sbn).

Regístrese y comuníquese

PAUL ALEX LLAMOJA CABANILLAS
Gerente General
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales